

Editorial

Haití: una mala solución

La invasión de Haití por tropas estadounidenses ha despertado viejos temores. La memoria histórica latinoamericana y caribeña ha despertado y ha recordado otras invasiones similares, algunas de ellas lejanas, a comienzos de siglo, y otras próximas (Grenada y Panamá). Por lo general, estas invasiones, seguidas de ocupaciones más o menos prolongadas, no han dejado nada bueno para los países al no resolver sus problemas; al contrario, han generado otros igualmente graves. Por ello, en América Latina y en el Caribe casi nadie confía en estas operaciones militares de Estados Unidos.

Bien vistas las cosas, se trata siempre de la misma política imperial torpe y cortoplacista. Durante décadas, Estados Unidos ha sido aliada incondicional de los militares que más tarde quiere echar del poder por la fuerza. Ella los forma y les financia sus aventuras a cambio de su colaboración. Pero luego los militares se vuelven indeseables y, entonces, los aliados se convierten en enemigos que deben ser echados del poder por la fuerza.

Haití no es la excepción. El desembarco y la ocupación de esta nación recuerdan crudamente esta pésima política exterior tan típica de Estados Unidos así como también su inmenso poder militar, siempre listo para ser desplegado en cualquier parte del mundo. Desde otra perspectiva, la ocupación de Haití cuestiona el interés de la comunidad internacional y en particular el de Estados Unidos en la democratización y en el desarrollo sostenible de América Latina y del Caribe.

1. Los dilemas de la invasión

Muchos se preguntan con toda razón qué hace Estados Unidos en Haití otra vez, un país donde no tiene intereses económicos importantes, donde no está en peligro su seguridad nacional y donde predomina la pobreza más pavorosa de América Latina y del hemisferio occidental. ¿Qué amenaza representa Haití para que Estados Unidos haya llegado

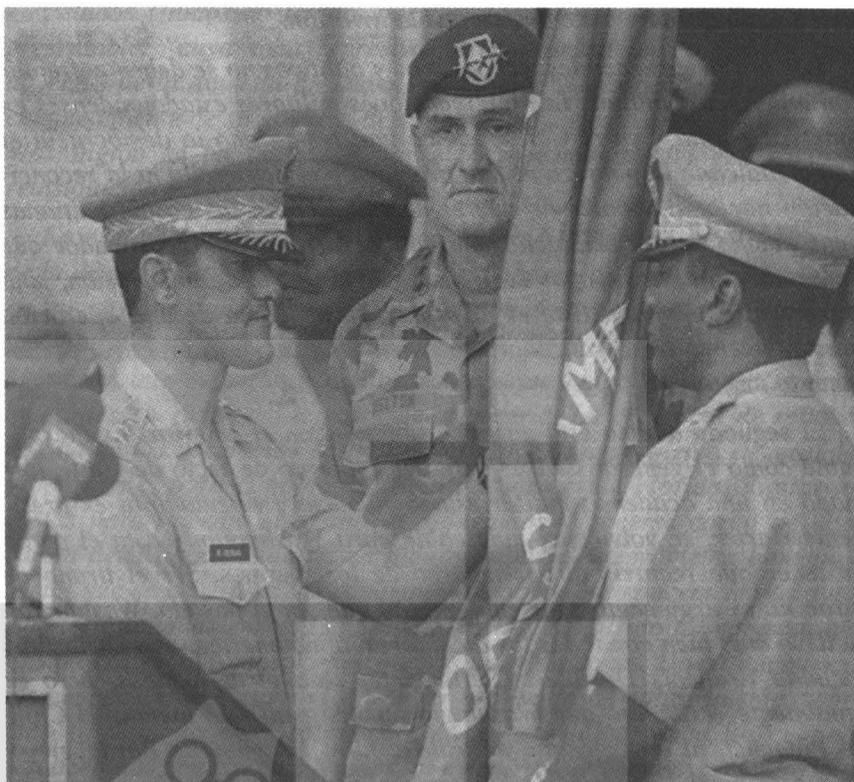
¿Qué amenaza representa Haití para que Estados Unidos haya llegado al extremo de comprometer la vida de varios miles de sus ciudadanos y haya invitado a otras naciones de fuera del continente a acompañarla en esta operación?

al extremo de comprometer la vida de varios miles de sus ciudadanos y haya invitado a otras naciones de fuera del continente a acompañarla en esta operación? Recordemos que para este país es norma aceptada que las vidas estadounidenses sólo deben ser arriesgadas cuando existe una amenaza muy clara para la seguridad de la nación y que es un principio de larga data que los problemas americanos deben ser resueltos por los americanos exclusivamente.

La respuesta de Washington es sencilla, pero muy poco apegada a la verdad, la comunidad internacional está obligada a promover la democracia y a eliminar el sufrimiento en Haití, restableciendo en el poder a un presidente electo democráticamente y derrocado luego por una junta de militares asesinos. Sin embargo, esta obligación tiene sus excepciones. Estados Unidos no intervino en Bosnia directamente —aunque sí lo hizo por medio de la OTAN—, donde las atrocidades han sido mucho mayores que en Haití, alegando que no podía servir como policía del mundo, ni en Ruanda, donde la barbarie y el sufrimiento han conmocionado a una opinión pública internacional ya acostumbrada a contemplar pasivamente esta clase de catástrofes humanas, argumentando que en esta parte de Africa sus intereses nacionales no estaban en peligro.

Washington se aproximó más a la verdad cuando afirmó que las grandes potencias tienen una responsabilidad especial para mantener la paz y la estabilidad en su traspatio. Esta tesis, repetida por la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, es la que ha justificado la mayoría de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde mediados del siglo XIX. Al justificar en estos términos la nueva invasión a Haití, Estados Unidos también está dando vía libre a Rusia, China o Japón para que hagan otro tanto con su propio traspatio cuando así lo consideren conveniente.

Esa responsabilidad que Estados Unidos se atribuye gratuitamente comprende, en estos tiempos posteriores a la guerra fría, salvaguardar la democracia. En el caso de Haití se trata de la reinstalación en el poder de un presidente electo democráticamente hace cuatro años, pero derrocado por los militares a los siete meses de iniciado su mandato. Aunque el propósito puede parecer bueno en sí mismo y la dedicación estadounidense a la democracia podría ser loable, en la práctica, el desembarco y la ocupación de Haití se caracterizan por los dilemas que



distinguen a la política imperial de Estados Unidos que, al final, hacen que estas aventuras acaben en el fracaso más estruendoso.

Por eso no es fútil comenzar preguntándose cómo se llegó a una situación tan extrema en Haití, donde para "restaurar la democracia", para usar la formulación oficial estadounidense, se hizo necesario recurrir a una operación militar de gran envergadura. ¿Por qué no quedó otra opción que la invasión militar de una pequeña nación caribeña prácticamente desarmada y empobrecida por parte de una superpotencia que cuenta con la tecnología más sofisticada del mundo? Estados Unidos apoyó a los militares haitianos porque pensaba que éstos servían mejor sus intereses, pero al mismo tiempo consolidó su posición internamente. Cuando quiso prescindir de ellos, las buenas palabras no bastaron. Entonces, hubo que recurrir a las presiones diplomáticas y al embargo comercial, pero los generales haitianos sobrevivieron a ambos, haciendo caso omiso de las primeras y evadiendo las restricciones comerciales a través de la frontera con República Dominicana, lo cual les dio una oportunidad más para seguir enriqueciéndose y para enriquecer a unos cuantos comerciantes privilegiados. Agotadas esas vías, aparen-

temente, no quedaba más opción que la invasión.

Los problemas sociales, económicos y políticos no se deben enfrentar con una opción militar. Las intervenciones militares estadounidenses en América Latina y en el Caribe nunca han restaurado la democracia ni han erradicado la pobreza ni han promovido el desarrollo ni la reconciliación nacional. Aparte de que el desembarco en las costas haitianas tiene mucho de ese exhibicionismo militar arrogante y provocador que no ayuda a que las tropas sean vistas como parte de una misión, sino como una ocupación. Este es el primer gran dilema de una operación presuntamente democratizadora, pero en la cual, en la práctica, predomina lo militar.

El segundo dilema está muy relacionado con el anterior. Es inexplicable cómo el general Cédras, jefe del gobierno de facto de Haití, formado en una academia militar estadounidense y vinculado al ex presidente Carter, se volvió tan indeseable para Washington hasta el punto de tener que recurrir al desembarco de los marines. Ser el tirano de turno no es argumento suficiente, puesto que, en el pasado, Washington se llevó muy bien con todos los dictadores latinoamericanos y caribeños, incluido François Duvalier. Ciertamente, eran otros tiempos, pero es igualmente verdadero que Washington nunca pensó en invadir el Chile de Pinochet, ni la Argentina de Videla, ni el Uruguay de Bordaberry y Pacheco, ni el Paraguay de Stroessner. Todas eran dictaduras amigas. Washington sólo derroca a las "dictaduras enemigas" como la del general Cédras (ver Mario Benedetti, "La invasión permanente", Carta a las Iglesias, 1994, 313, p.6ss.).

En Washington pesa más la ruptura con el general Cédras que su compromiso con la democracia. La alternativa para reemplazar al general no es del gusto del Departamento de Estado. Para éste, el presidente Aristide carece de las cualidades básicas para gobernar y, además, no es un incondicional de Estados Unidos. Desde el comienzo de su gobierno, Aristide es considerado por Washington como volátil, excéntrico e inestable y, por si esto fuera poco, de tendencia marxista y "teólogo de la liberación" —aunque también cuenta con apoyos importantes como el del director del Consejo de Seguridad Nacional. Por el otro lado, Estados Unidos no se fía de Aristide. Teme que, en un momento dado, en un arrebato de nacionalismo, tome postura contra la ocupación estadounidense. Estos temores no son infundados. El presidente Aristide no ha sido de los primeros en aplaudir el desembarco, lo ha hecho tardíamente y con reservas. Tampoco está de acuerdo con los compromisos unilaterales acordados entre el ex presidente Carter y los generales haitianos, aunque al final tendrá que aceptar que su regreso al poder será posible gracias a dichos compromisos y a la ocupación estadounidense.

Estados Unidos ha tenido, pues, que escoger entre un dictador impresentable, "cuya saña represiva se inscribe en las tradiciones más abyectas de la dinastía de Duvalier" (Ibid.), y un presidente que no es completamente de su gusto ni de su línea, pero electo democráticamente. Washington se ha inclinado por el derrocamiento del general y la reinstalación del presidente Aristide.

En el fondo de esta decisión incómoda no está tanto la restauración de la democracia como el constante desembarco de refugiados haitianos en las costas estadounidenses, lo cual colmó la paciencia de Washington. Entre enero de 1993 y septiembre de 1994, los guardacostas estadounidenses interceptaron y repatriaron a unos 11 mil haitianos, quienes huían desesperados del terror y de la miseria. La presencia de refugiados haitianos y cubanos se ha convertido en un problema de grandes proporciones para el gobierno federal y para el de Florida. Vigilar las costas para impedir el arribo de refugiados y hacerse cargo de ellos cuesta demasiados millones de dólares, aparte del problema humano y social que se genera en los campamentos donde los concentran las autoridades estadounidenses. Los refugiados han adquirido tal volumen que ni siquiera el flujo masivo de cubanos es tolerado ya. Hasta hace poco, los cubanos eran bienvenidos por ser muy valiosos políticamente, sobre todo en términos electorales; pero en la actualidad, ya ni los cubanos son aceptados en Estados Unidos, al menos masivamente.

Washington calcula, sin duda, que el gobierno del presidente Aristide generará condiciones para detener drásticamente el flujo de emigrantes, mientras que, por el otro lado, las dudas que pesan sobre su persona y su capacidad para gobernar podrían ser contrarrestadas política y diplomáticamente. De esta manera, la invasión de Haití se convirtió en un asunto de primera importancia para la política interna de Estados Unidos. El sueño americano y su modo de vida no son para cualquiera.

Adicionalmente, el desembarco y la ocupación de Haití, justo unas pocas semanas antes de las elecciones para el Congreso estadounidense, sin dificultades mayores y sin bajas de marines pueden convertirse en una variable importante para conseguir votos para los candidatos demócratas, sobre todo en aquellos estados afectados por la inmigración. A posteriori, el riesgo valió la pena.

Una vez decidida la invasión, se planteó un tercer dilema, cómo llevarla a cabo. Como es natural, la decisión fue adoptada unilateralmente por Washington, pero ésta no quería penetrar en Haití sola, sino acompañada de socios subordinados. Desde la guerra del Golfo Pérsico, consciente de los costos políticos y del deterioro de su imagen internacional que estas aventuras causan, Estados Unidos busca socios dispuestos a cooperar, pero bajo su dirección. Ante el fracaso de tantas

aventuras internacionales similares, Estados Unidos parece haber escarmentado y busca compartir los riesgos de la intervención o, al menos, intenta encubriarla, comprometiendo en ella a otros países. La fórmula ideal parece haberla encontrado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual le da la misión para intervenir, invadir, ocupar, imponer embargos y castigos, etc.

Pero los intereses imperialistas son tan fuertes, que ni siquiera este recurso a Naciones Unidas puede ocultarlos. En la práctica, el Consejo de Seguridad se encuentra al servicio de los intereses y de la política exterior estadounidense. En la guerra del Golfo, por ejemplo, Estados Unidos insistió tanto que al final, los gobiernos europeos colaboraron. La participación de tropas de otros países, amparada en resoluciones del Consejo de Seguridad, es un mero formalismo que a duras penas se guarda. Estados Unidos ha establecido que en aquellas misiones de Naciones Unidas donde sus tropas participen, éstas serán comandadas por oficiales militares estadounidenses, quienes tendrán comunicación directa con el Pentágono y podrán desobedecer aquellas órdenes provenientes del jefe de la misión (cuando éste no sea estadounidense) que les parezcan arriesgadas o contrarias a las leyes.

En la guerra del Golfo Pérsico, en Somalia y ahora en Haití, Estados Unidos ha actuado de acuerdo a estos lineamientos, prostituyendo una instancia que, en principio, podría haber sido muy útil para poner fin a guerras interminables y crueles y para restablecer la paz en naciones donde las fuerzas sociales internas se encuentran enfrentadas irreconciliable y destructivamente —si, además, Naciones Unidas actuase de una forma más profesional, decidida y eficaz.

Ahora bien, encontrar socios subordinados para participar en estas empresas de corte imperialista no es fácil. Cada vez que Estados Unidos planifica una aventura militar debe recurrir a vastas e intensas maniobras diplomáticas para convencer a otros gobiernos, pues éstos, por sí mismos, no se suman a sus veleidades imperialistas y las respaldan con dificultad. En el caso de Haití, esos esfuerzos no arrojaron resultados muy alentadores. De hecho, el respaldo internacional logrado es más un tributo al poder de la potencia imperial que a sus propósitos. Con la excepción de Argentina, que apoyó la operación con un entusiasmo genuino, la mayoría de las naciones occidentales lo hizo movida por el poder económico de Estados Unidos o porque ha recibido o espera reci-

En el fondo de esta decisión incómoda no está tanto la restauración de la democracia como el constante desembarco de refugiados haitianos en las costas estadounidenses, lo cual colmó la paciencia de Washington.

bir asistencia para mantener su propia seguridad o para poder influenciar en alguna medida una acción con la cual están en desacuerdo.

De todas maneras, Estados Unidos se conforma con que los gobiernos que se mantienen al margen, por lo menos, aplaudan sus esfuerzos por "restablecer la democracia". Así, El Salvador se unió puntualmente al coro de los que aplaudieron, pero sin mucho entusiasmo, y ha dejado entrever que estaría dispuesta a enviar un pequeño contingente policial en el futuro.

En una coincidencia poco común, la simple idea de una invasión estadounidense a Haití provocó escepticismo general cuando no oposición en los gobiernos latinoamericanos y caribeños, de derecha e izquierda, excepto en el argentino. Por esta razón, Washington no acudió a la institución hemisférica específicamente diseñada para este propósito, la Organización de Estados Americanos, sino que apeló a las naciones de fuera del hemisferio, irrespetando uno de los dogmas más sagrados de la diplomacia estadounidense, establecido desde comienzos del siglo XIX, América para los americanos, es decir, en la práctica, para Estados Unidos (Ibid.). Desde la doctrina Monroe hasta el tratado de Río de Janeiro (1947), Estados Unidos siempre se ha esforzado por mantener fuera del hemisferio a las otras potencias.



Esta sorprendente coincidencia de los gobiernos latinoamericanos y caribeños se explica por su temor cerval y su desconfianza histórica a las intervenciones militares y políticas de Estados Unidos. Ninguno de estos gobiernos quisiera ser objeto de la ira de Washington ni víctima de la consiguiente invasión porque todos saben que es inútil resistir una invasión de Estados Unidos. Más aún, todos saben que cuando Washington se propone algo es muy difícil resistir.

Al conseguir socios subalternos para sus aventuras militares, Estados Unidos obtiene una ventaja adicional. Cuando invadía sin aliados, el costo de la operación militar debía salir de su propio presupuesto. Ahora, en cambio, cuando consigue que el Consejo de Seguridad le dé la misión, la responsabilidad económica es colectiva, es decir, los miembros de dicho Consejo deben concurrir proporcionalmente con el costo de la operación de tal manera que Estados Unidos sólo pone una parte de él. Para Estados Unidos el negocio es redondo, invade la nación que le interesa y encima le sale barato. Hace algunos años se dijo —nos recuerda Benedetti— que la Organización de Estados Americanos era una especie de ministerio de colonias estadounidense. Ahora, en cambio, Naciones Unidas se está convirtiendo en el ministerio de defensa de Estados Unidos.

Cuando Washington decidió unilateralmente invadir Haití, surgió otro dilema inexplicable. Ante la resistencia de los militares a las presiones diplomáticas y al embargo comercial, la invasión tenía como primer objetivo echarlos del poder por la fuerza militar; pero el derrocamiento de los militares se pospuso y la invasión —ya en marcha— se convirtió en un desembarco en el cual cooperaron los mismos generales haitianos que tres días antes eran considerados por Washington como asesinos responsables de varias masacres. Las sanciones económicas contra el régimen militar fueron levantadas rápidamente por Estados Unidos antes que se disiparan las dudas sobre el futuro de los generales, sin contar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que las había apoyado, e incluso sin probablemente caer en la cuenta de la brecha que esta decisión abrió en la política del Departamento de Estado hacia Cuba.

Estos cambios se deben a las gestiones diplomáticas de última hora del ex presidente Carter quien, gracias a sus buenas relaciones con los generales haitianos, acordó con ellos que abandonarían el poder a más tardar el 15 de octubre a cambio de una amnistía y de permitir el retorno del presidente Aristide. En la práctica, el acuerdo cedía a las tropas estadounidenses el control de Haití.

El llamado acuerdo Carter fue saludado como un éxito de la diplomacia estadounidense que así había logrado salvar vidas estadouniden-

Si el propósito verdadero de la intervención es establecer la democracia, esto es mucho más que devolver al poder a un presidente. Para establecer la democracia hay que ayudar a Haití a salir de la miseria...

ses y haitianas y permitía el regreso del presidente Aristide con un año de retraso —después del acuerdo no cumplido de la Isla de Gobernadores. El acuerdo, sin embargo, no es tan consistente como la prensa y la Casa Blanca lo presentan. El ex presidente Carter, quien no pudo ocultar su entusiasmo por los generales haitianos, no cumplió con las metas propuestas cabalmente, pues no garantizó que los generales abandonarían el país y, además, les prometió unilateralmente la amnistía inevitable.

Ahora bien, esto no es todo. El acuerdo facilitó, ciertamente, el ingreso de las tropas estadounidenses en Haití, pero no prevee su salida, dada la vaguedad de los fines de la operación. Formalmente se trata de “restablecer la democracia”, pero, de hecho, los marines tienen en sus manos el control del país. No sería remoto que los militares estadounidenses se vieran cada vez más comprometidos con la situación interna de Haití e incluso que acabasen apoyando a una de las facciones locales —y no sería nada extraño que se decantaran por la facción más contraria a los propósitos formales de la operación.

El éxito del desembarco y de la ocupación no están asegurados por el poderío militar de la primera potencia mundial, todo lo contrario, tienen visos de que acabarán como otras operaciones militares similares de Washington. El propósito formal de “restaurar la democracia”, por su naturaleza, va más allá que entregar el poder al presidente Aristide y puede entrapar al ejército estadounidense en una ocupación interminable que no lleve más que a un nuevo fiasco. Aparte de que hablar de “restaurar la democracia” es un eufemismo, puesto que Haití no ha gozado de este privilegio durante décadas. En sentido estricto, sólo hubo un atisbo de democracia en los siete meses que gobernó el presidente Aristide, al comienzo de su mandato.

Por ahora, Estados Unidos ha quedado mal con todos. Aristide no está satisfecho con el acuerdo Carter, en especial con la amnistía. Sus partidarios tampoco están contentos, pues Washington comprometió demasiado con los generales. Estos podrán permanecer en el país sin tener que dar cuenta de sus crímenes y gozando de sus jugosas cuentas bancarias y de sus extensas propiedades. El negociador de Naciones Unidas renunció en protesta por la forma unilateral en la que Washington decidió invadir. El Congreso de Estados Unidos está sumamente nervioso por el peligro de ver a sus tropas entrampadas en Haití, una nación que,

según algunos de ellos, no amerita la muerte de un solo soldado estadounidense. Así, pues, de momento, los principales beneficiarios de la ocupación parecen ser los generales haitianos, quienes derrocaron a un presidente electo democráticamente, gobernaron durante tres años a su antojo, violaron sistemática y masivamente los derechos humanos y ahora se retiran con el orgullo algo maltrecho, pero impunes .

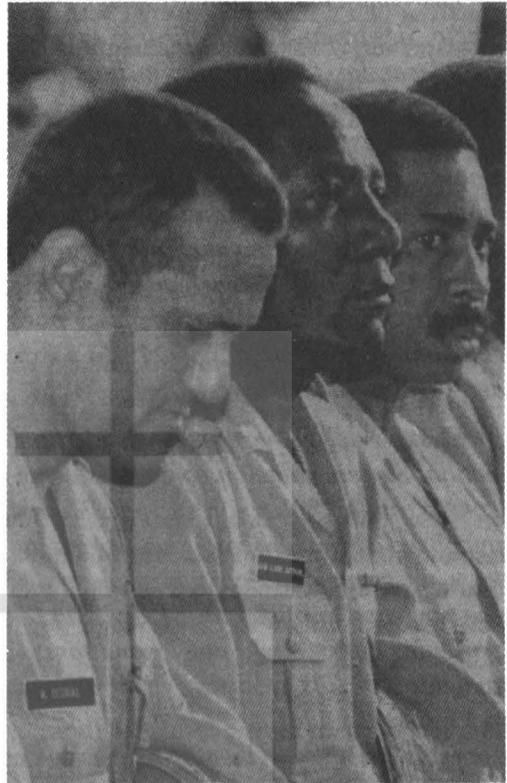
2. El futuro de la invasión

Haití fue la primera nación independiente de América Latina, pero ahora es la menos libre y la más pobre. Haití tiene, además, una larga historia de invasiones militares estadounidenses. La primera ocurrió en 1915 con el pretexto de no haber cumplido algunos compromisos. Los marines invadieron y se quedaron veinte años. El resultado de la intervención militar fue catastrófico, tres presidentes puntualmente derrocados por el ejército haitiano hasta que Estados Unidos impuso y sostuvo a François Duvalier, desde 1957 hasta su muerte en 1971. Su hijo heredó el poder hasta que otro golpe militar lo derrocó después de una sublevación popular en 1986. Durante la dictadura de Duvalier fueron asesinadas más de 40 mil personas. Todo ello con el apoyo explícito de Washington, que siempre ha sabido de buena fuente cómo se violan los derechos humanos y cómo los haitianos se mueren de hambre y enfermedad (Ibid.).

Después de un intervalo, Jean-Bertrand Aristide fue electo presidente en las elecciones más democráticas de la historia de Haití, pero sólo le permitieron gobernar siete meses, pues un nuevo golpe militar lo derrocó y lo obligó a refugiarse en el exilio. Aunque la oposición se empeña en negarlo, incluida Washington, y pese a algunos errores políticos objetivos, en esos siete meses los asesinatos disminuyeron notablemente, la corrupción fue combatida y el dinero comenzó a llegar a las arcas del Estado. En cualquier caso, basta con comparar los resultados de esos siete meses con los de los tres años del general Cédras y sus compinches. La situación se volvió tan insostenible que algo había que hacer para liberar a la población de los generales. Sin embargo, lo que Estados Unidos ha hecho tiene graves antecedentes y plantea dilemas difíciles de resolver, los cuales si no atendidos cuidadosamente colocan en peligro el futuro de la invasión.

Aparentemente, la democracia se restauraría con reinstalar a Aristide en el poder, pero, en realidad, la tarea es mucho más compleja. Si el propósito verdadero de la intervención es establecer la democracia, esto es mucho más que devolver el poder a un presidente. Para establecer la democracia hay que ayudar a Haití a salir de la miseria en la que ha vivido durante décadas y también hacer reformas internas radicales,

puesto que existe concentración de riqueza en unas pocas manos, entre ellas, algunas militares. La democratización del país no será posible mientras exista un ejército preparado para derrocar a cualquier gobierno que no sea de su agrado. De ahí el peligro de que los generales permanezcan en el país o encuentren asilo en la vecina República Dominicana que, para el caso, es casi lo mismo. Como cualquier democracia, la haitiana necesita también de un sistema judicial eficaz.



La democratización de Haití, por lo tanto, puede llevar más de una década y muchos miles de millones de dólares. Si éste fuera el propósito del desembarco, la misión llevaría mucho más tiempo y muchísimo más dinero del que Estados Unidos y sus socios del Consejo de Seguridad están dispuestos a emplear y gastar. Pero el objetivo real de la invasión no es la democracia en su sentido pleno y amplio, ni poner los fundamentos para el desarrollo económico social de Haití, sino establecer unas condiciones mínimas para cortar drásticamente la emigración masiva de haitianos hacia las costas estadounidenses.

Una vez que los marines tengan bajo control el país, arribará una misión de Naciones Unidas, cuyo componente principal estará integrado mayoritariamente por estadounidenses, para establecer esas condiciones mínimas. A juzgar por la experiencia de la misión de Naciones Unidas en El Salvador, el Consejo de Seguridad no está dispuesto a invertir los miles de millones de dólares necesarios para instaurar una democracia de amplia participación en Haití. Los miembros del Consejo de Seguridad tienen la misma visión inmedatista de Estados Unidos. Una vez establecidas las condiciones que consideren suficientes para sus expectativas que, por lo general, suelen ser mucho menores que las de la población local, abandonarán Haití a su suerte. Así, pues, el compromiso de la comunidad internacional para promover la democracia y eliminar el sufrimiento es muy limitado.

Las condiciones mínimas comprenden la reinstalación del presidente electo, desarmar y neutralizar a las fuerzas militares y paramilitares, y establecer los fundamentos institucionales del Estado. Sin embargo, el éxito de la misión de Naciones Unidas dependerá del estado en el que las tropas estadounidenses dejen Haití, de la generosidad financiera del Consejo de Seguridad y de la capacidad de Naciones Unidas para llevar adelante esta tarea ardua y compleja. Los riesgos son muy elevados porque los marines no suelen dejar a su paso más que destrucción, porque el Consejo de Seguridad no suele estar a la altura de sus graves responsabilidades internacionales y porque Naciones Unidas no cuenta con suficiente personal capacitado y experimentado para hacerse cargo de esta clase de misiones.

El éxito del gobierno de Aristide también se encuentra muy comprometido. Su reinstalación como presidente no implica necesariamente que vaya a poder gobernar un país desarticulado por la invasión, más empobrecido y hambriento, con un ejército y una policía de lealtad dudosa, y sin gozar de la confianza plena de Washington. Aristide regresa a una sociedad profundamente dividida, en la cual quienes apoyan a los generales hacen duelo por los militares haitianos muertos en un enfrentamiento con los marines, mientras que sus partidarios recuerdan los tres mil asesinados después del golpe de Estado de aquéllos. Los seguidores de Aristide reciben a los marines con muestras de júbilo popular, pero los leales a los militares los golpean y asesinan brutalmente delante de los soldados y de la opinión pública estadounidense. Para el gobierno de facto, la intervención de Estados Unidos es intolerable e inaceptable, para los seguidores de Aristide abre espacios ambiguos.

La amnistía prometida por Carter para todos aquellos que se encuentren directa e indirectamente implicados en la crisis haitiana desde el 30 de septiembre de 1991 no ayudará a la reconciliación de la sociedad haitiana, sino que sólo servirá para garantizar la impunidad a los militares. Tampoco hace un buen servicio a los derechos humanos —cosa por la cual el ex presidente Carter no parecía estar muy preocupado cuando pactó con los generales haitianos. El presidente Aristide no está a favor de la amnistía porque teme que pudiera dar paso a venganzas personales. De hecho, cada vez que las tropas de ocupación capturan a un jefe paramilitar, el público aplaude entusiasmado y deja entrever que, de lo contrario, ya habrían dado buena cuenta de él.

El desarme de la principal organización paramilitar haitiana (el

Aristide es considerado como el líder nato por buena parte de la población haitiana y ésta espera de él la democracia y un futuro mejor.

Frente para el Avance y el Progreso de Haití), constituida con la ayuda del gobierno estadounidense, y la captura de sus miembros por parte de las fuerzas de ocupación es un paso importante para evitar el terror y nuevos asesinatos, pero no implica, necesariamente, un avance hacia la democracia. Esta organización fue uno de los pilares fundamentales del gobierno de facto del general Cédras, ya que con ella mantuvo a raya a los seguidores de Aristide y a la oposición en general. Sin embargo, la captura de sus miembros plantea otros problemas que pueden neutralizar las medidas adoptadas: ¿con qué facultades capturan ciudadanos haitianos las fuerzas de ocupación? ¿Los pueden retener? ¿A quién se los van a entregar? ¿Serán juzgados y sancionados o se beneficiarán de la amnistía y serán puestos en libertad? Si este fuese el caso, Haití seguirá siendo una nación insegura para todos sus habitantes, incluido su presidente.

El desconocimiento del poder civil por parte del ejército pone en peligro la permanencia de Aristide en la presidencia o al menos plantea serias dudas sobre la libertad que tendrá para gobernar. Es cierto que las tropas de ocupación se han ido apoderando de todos los cuarteles del ejército, pero no está claro cuál será su futuro. ¿Qué pasará cuando las tropas estadounidenses abandonen el país? La amnistía les permite salir impunes de este trance y gozar de libertad. Si este fuera el caso, el riesgo de una guerra civil no es irreal. Entonces, ¿será necesario que la fuerza militar extranjera permanezca indefinidamente para evitar dicha guerra o integrará y formará otro ejército tal como lo hizo en la Nicaragua somocista? Dudamos seriamente que el ejército de ocupación esté capacitado para formar un ejército democrático en Haití.



De momento, la ocupación de la nación avanza sin tropiezos. Las tropas estadounidenses protegen a los parlamentarios para que éstos puedan reunirse y discutir las leyes —entre ellas la de amnistía—; se han apoderado de los medios de comunicación nacional para impedir que transmitan mensajes contrarios al presidente Aristide y a la ocupación; están comprando las armas repartidas entre la población civil leal a los generales; comienzan a dismantelar la estructura paramilitar que mantenía aterrorizada a la población e impiden que la población hambrienta asalte y saquee los depósitos de alimentos.

En este contexto, cabe preguntarse también cuál es el compromiso de la Iglesia católica ante la tragedia del pueblo haitiano. El Vaticano fue el único Estado que reconoció oficialmente al gobierno de facto de los militares, sin duda porque Aristide, al ser sacerdote, no acató las órdenes del Papa de no participar en política partidista. Después del golpe del general Cédras, tanto la nunciatura como el episcopado, exceptuando al obispo Romelus, se desentendieron de la crisis del país. ¿Seguirán desentendiéndose o seguirán el ejemplo de los religiosos y de otros cristianos comprometidos?

El futuro de la invasión estadounidense y el futuro mismo de Haití son conflictivos. Aunque la ocupación parece avanzar tal como estaba planeada, ya se vislumbran dificultades enormes que arrojan más sombras que luces sobre el futuro de esta sufrida nación. Pero por grandes que sean las dificultades, ellas no excusan del compromiso para buscarles solución. El problema es que el medio al cual se ha recurrido es, en sí mismo, inadecuado. Con M. Benedetti podemos afirmar que a la revolución permanente de los viejos marxistas, la primera potencia mundial ha respondido con la invasión permanente: Haití (1915-1934) Honduras (1903), Nicaragua (cinco invasiones desde 1855), República Dominicana (1964) Grenada (1983) y Panamá (1989). Aparte de objetivos más lejanos como Corea, Líbano, Vietnam, el Golfo Pérsico, Somalia. La mayoría de estas intervenciones no mejoró el nivel de vida, ni promovió la reconciliación nacional, ni hizo que hubiese más justicia, paz y democracia en las naciones invadidas.

El relevo que hará la misión de Naciones Unidas en Haití cuando termine la ocupación puede ayudar a superar algunos obstáculos, pero no resolverá sus graves problemas nacionales, así como no ha podido resolver los de El Salvador. A lo más que se puede aspirar es a una reforma de la superestructura formal del Estado que permita canalizar los conflictos sociales a través de las instancias institucionales, pero no irá más allá. La resolución de los graves problemas estructurales corresponderá a las fuerzas progresistas del pueblo haitiano.

En este sentido, el presidente Aristide y sus asesores tienen una gran

responsabilidad, pero también cuentan con un apoyo popular muy importante. Aristide es considerado como el líder nato de buena parte de la población haitiana y ésta espera de él la democracia y un futuro mejor. Este apoyo popular es clave para llevar las reformas sociales lo más lejos posible. Lo que Aristide y sus seguidores no hagan en esta dirección, no lo harán Naciones Unidas ni mucho menos Estados Unidos.

San Salvador, 12 de octubre de 1994.

